

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veinte de enero de dos mil veintiuno (2021).

Auto Interlocutorio No. 022

MAGISTRADO PONENTE: VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ

Medio de Control:	Ejecutivo
Expediente:	76001-33-33-008-2018-00240-01
Ejecutante:	María Edilma Rincón de Rojas Apoderada Lilia Tafur Tenorio abogadaliliatt@hotmail.com
Ejecutado:	Universidad del Valle notificacionesjudiciales.juridica@correounivalle.edu.co juridica@univalle.edu.co rector@univalle.edu.co notificacionesunivalle@mca.com.co
Asunto	Confirma auto que decretó medida cautelar

Providencia discutida y aprobada en Sala y Acta de la fecha

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resolverá el recurso apelación interpuesto por la parte ejecutada, contra el auto interlocutorio No. 0343 del 08 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que decretó la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante.

II. ANTECEDENTES

La señora María Edilma Rincón de Rojas, a través de apoderada judicial presentó proceso ejecutivo contra la Universidad del Valle y solicitó se libre mandamiento de pago conforme con lo ordenado en sentencia No. 094 del 24 de mayo de 2011, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, confirmada por este Tribunal través de providencia No. 028 del 04 de mayo de 2012¹.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 0342 del 08 de mayo de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali decretó el embargo y retención de los dineros que la Universidad del Valle llegare a tener en las cuentas del Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Popular, Banco BBVA, Banco Colpatria, Banco Citibank, Banco GNB Sudameris, Banco Caja Social, Banco Agrario de Colombia, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco Helm Bank, Bancoomeva, Banco Falabella y Banco Pichincha, haciendo la advertencia a la entidad financiera que en ningún caso se podrá tramitar el

¹ Ver folios 23 a 36

embargo sobre cuentas de recursos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la entidad, de conformidad con la Circular No. 014 del 08 de junio de 2018, expedida por la Procuraduría General de la Nación. Limitó la medida a la suma de \$30.000.000, sin perjuicio de que ésta pueda ser reducida a lo que resulte probado.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La parte apelante indicó² que la medida decretada no cumple con el lleno de los requisitos y condiciones que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia imponen para la procedibilidad de una medida cautelar contra un recurso público.

Como punto de inconformidad, indicó que las cuentas bancarias de la Universidad del Valle en las que se manejan recursos de seguridad social son inembargables, conforme a la normatividad vigente y, en especial, a lo dispuesto en la Circular No. 014 del 08 de junio de 2018 y en la Circular externa No. 007 del 19 de octubre de 2016 de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. Problema Jurídico

El asunto que se discute se contrae a establecer si las cuentas que ordenó embargar el juez de primera instancia manejan recursos de seguridad social y, por tanto, son inembargables.

5.2. Recuento normativo y jurisprudencial del proceso ejecutivo y las medidas cautelares:

- **Del procedimiento del proceso ejecutivo:**

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, pues si bien el artículo 298 se titula “procedimiento”, lo cierto es que en dicho precepto normativo se impone al juez el deber de hacer cumplir las obligaciones contenidas en determinados títulos ejecutivos, mas no se refiere a un genuino procedimiento de ejecución.

Sin embargo, la misma normatividad en su artículo 306 señaló que, en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en el cual de manera expresa se

² Ver folios 190 a 203

encuentra el trámite del proceso ejecutivo. La norma mencionada es del siguiente tenor:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, se tiene que los procesos ejecutivos administrativos, hoy en día, se deben tramitar por las reglas del proceso ejecutivo de que trata el artículo 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012.

Lo anterior, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado³ al manifestar que el proceso ejecutivo está regulado integralmente por el CGP y que por ello su desarrollo nace bajo el amparo de dicho estatuto, sobre este punto ha sostenido:

“ Los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones⁴, realización de audiencias⁵, sustentaciones y trámite de recursos⁶, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo. (negritas fuera del texto original)

- **Embargabilidad de las cuentas de las entidades estatales – reiteración jurisprudencial⁷:**

El artículo 63 de la Constitución Política consagra la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado y faculta al legislador para que determine qué otros activos estatales tienen esa misma naturaleza, así:

“Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

En ejercicio de dicha potestad, el legislador ha establecido en distintos cuerpos normativos la inembargabilidad de los recursos contenidos en el Presupuesto General de la Nación o los que son girados a las entidades territoriales para inversión social mediante el Sistema General de Participaciones.

³CONSEJO DE ESTADO. i) Sección Segunda, Subsección B, radicado 680012333000 2016-01034 01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.-

⁴ Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012.

⁵ Ver artículos 372 y 373 C.G.P.

⁶ Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.

⁷ Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARÍA ADRIANA MARÍN, 14 de marzo de 2019, Radicación número: 20001-23-31-004-2009-00065-01 (59802).

Estas disposiciones normativas e incluso algunas de igual contenido proferidas previo a la expedición de la Constitución de 1991- han sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, Corporación que ha establecido que, aunque la regla general sea la inembargabilidad de dichos recursos, **hay eventos excepcionales en que se debe permitir su embargo.**

El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8° parcial y 16 de la Ley 38 de 1989, y se estableció que las normas acusadas se ajustan a la Constitución bajo el entendido que *“en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”*.

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, *“por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”*, en el entendido que *“cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo”*.

Luego, mediante sentencia C-357 de 1997, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que consagra la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En dicha providencia, la Corte señaló que *“los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”*.

Estos pronunciamientos fueron abordados de manera sistemática en la sentencia C-1154 de 2008, en la que, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 21 parcial del Decreto 28 de 2008, *“por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y*

control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”, se construyó la línea jurisprudencial de la embargabilidad de los recursos públicos y se estableció que, pese a que la regla general sea su carácter inembargable, hay situaciones en las que resulta plausible permitir el embargo. Además precisó que dentro de estas excepciones se encuentran aquellos recursos que tienen destinación específica para inversión social -como los del SGP-, cuando excepcionalmente no haya otras cuentas o recursos que resulten suficientes para garantizar el pago de las acreencias, en aras de garantizar el respeto de otros valores constitucionales como “el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros”.

En ese mismo pronunciamiento, la Corte Constitucional precisó que la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos es una respuesta a “*la necesidad de armonizar esa cláusula [la de inembargabilidad] con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, [por lo que] la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada*”.

Así las cosas, **la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado.**

En este punto, debe precisarse que estas excepciones mantienen vigente “*la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado*”.

A pesar de la existencia de un precedente judicial consolidado frente al reconocimiento de tres excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se introdujo nuevamente en el ordenamiento jurídico una disposición rígida sobre el carácter inembargable de dichos recursos, así:

“Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

Parágrafo 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.

Por su parte, el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, volvió a consagrar legalmente la inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto nacional, así:

“Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas”.

Como puede verse, estas disposiciones son materialmente semejantes a los artículos 16 de la Ley 38 de 1989, 1° del Decreto 2282 de 1989 y 19 del Decreto 111 de 1996, sobre las que la Corte Constitucional declaró su exequibilidad condicionada en las sentencias C-546 de 1992, C-103 de 1994 y C-354 de 1997, respectivamente, en los términos señalados en párrafos precedentes.

Por tratarse de disposiciones con un contenido normativo semejante al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en las providencias que consolidaron el precedente que establece excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y condiciona la interpretación constitucional adecuada de los nuevos preceptos legales, en el sentido de reconocer la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, pero aceptando que hay tres excepciones relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias o títulos ejecutivos emanados del Estado, las cuales permiten el embargo excepcional de dichos recursos, siempre que la obligación ejecutada se encuadre en alguna de ellas y que, en el caso de embargo de recursos que tienen destinación específica, se haya constatado que con el embargo de otros recursos de la entidad deudora no se logre cubrir la totalidad de la acreencia.

Esta postura también fue sostenida por el Consejo de Estado⁸ en auto del 8 de mayo de 2014, en la que se señaló:

“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del

⁸ Esta providencia fue proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso con radicado 19717, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Estado, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.

Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral”.

- **El trámite para el embargo de recursos que tienen carácter de inembargables**

El artículo 594 del Código General del Proceso enlista los bienes que tienen carácter de inembargables. No obstante, el párrafo de ese mismo artículo prevé la posibilidad de embargar recursos de esa naturaleza, pues describe un trámite para ello. El párrafo dispone:

“PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”.

De conformidad con lo anterior, si el embargo recae sobre recursos que tengan el carácter de inembargables, el funcionario judicial deberá indicar el fundamento legal para decretar esa medida cautelar.

Ese precepto normativo también establece que las entidades destinatarias de la orden de embargo pueden abstenerse de registrar la medida cautelar sobre los bienes y recursos descritos en el artículo 594 del Código General del Proceso,

cuando no se indique el fundamento de la excepción al principio de inembargabilidad, es decir, cuando la orden de embargo no exponga por qué, a pesar de la naturaleza de los recursos, debe aplicarse el embargo de los dineros. En ese evento, las entidades deberán informar a la autoridad judicial sobre el no acatamiento de la medida cautelar, para que esta, en un término de tres días a la comunicación de no acatamiento de la medida cautelar, manifieste si procede alguna excepción al principio de inembargabilidad.

Si dentro del término de los tres días siguientes a la comunicación del no acatamiento de la medida cautelar la autoridad judicial insiste en el embargo, las entidades destinatarias deberán acatarlo. En caso contrario, es decir, si dentro de los tres días siguientes a la comunicación del no acatamiento de la medida cautelar la autoridad judicial guarda silencio, la medida cautelar se entenderá revocada.

5.3. Caso concreto:

Considera el apelante en síntesis que las cuentas bancarias de la Universidad del Valle en las que se manejan recursos de la seguridad social son inembargables.

Conforme al cuadro normativo y jurisprudencial transcrito en precedencia, la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con:

- i) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas,
- ii) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; y,
- iii) La ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado.

Revisado el plenario, el presente proceso tiene por objeto la ejecución de una prestación consistente en el pago de unos valores contenidos en una sentencia judicial; por lo que se configura una de las excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos establecida en la jurisprudencia constitucional, consistente en el cobro de una obligación clara, expresa y actualmente exigible contenida en una providencia judicial. Por otra parte, el auto recurrido no desconoció la inembargabilidad de los recursos estatales, por lo que realizó las previsiones legales para ello.

Es preciso indicar que, al momento de decretar la medida cautelar, el juez de primera instancia indicó las limitaciones de embargabilidad de las cuentas solicitadas y advirtió claramente que la entidad financiera en ningún caso podría tramitar el embargo sobre cuentas de recursos destinados al sistema general de

seguridad social en salud de la entidad, de conformidad con la Circular No. 014 del 08 de junio de 2018, expedida por la Procuraduría General de la Nación, por lo que no resulta de recibo el argumento expuesto por la entidad demandada como sustento del recurso de apelación, si en cuenta se tiene además que es viable que la Universidad del Valle tenga recursos en los bancos comerciales que no estén destinados al sistema general de seguridad social en salud.

Además, debe tenerse en cuenta que, en caso de duda acerca de los recursos depositados en las cuentas de las cuales se solicita el embargo, **es la entidad financiera** quien debe identificar la condición de inembargabilidad de los mismos y dar aplicación al artículo 594⁹ del CGP.

Lo anterior fue reiterado en providencia del 02 de abril de 2019, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A¹⁰, en la que se recordó:

“(…)

Finalmente, es importante recordar que las entidades financieras deben cumplir con los deberes y responsabilidades de identificar la condición de inembargabilidad de los recursos públicos, desde el momento en que abren la respectiva cuenta corriente o ahorros, como lo indica la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, tal como fue actualizada por la Circular 031 de 2016, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia¹¹.(negrillas y subrayas por fuera de texto).

Además, debe tenerse en cuenta que la parte recurrente no demostró que las cuentas cuyo embargo fue ordenado manejaran recursos destinados a la seguridad social. Así las cosas, se confirmará el auto apelado toda vez que las inconformidades planteadas por el apelante no son impedimento para decretar

⁹ ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(....)

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

¹⁰ C.P: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, RAD. 68001-23-33-000-2018-00458-01)63506.

¹¹ “5.1.6. Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas sobre recursos inembargables: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, 134 y 182 de la Ley 100 de 1993, 19 del Decreto Extraordinario 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), 91 de la Ley 715 de 2001, 8 del Decreto 050 de 2003, son inembargables los recursos de: el Sistema de Seguridad Social, las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, el Sistema General de Participaciones - SGP-, Regalías y los demás recursos a los que la ley le otorgue la condición de inembargables. // En tal virtud, en los eventos en los cuales las entidades vigiladas reciban órdenes de embargo respecto de los recursos anteriormente mencionados, deben cumplir el procedimiento señalado en el parágrafo del artículo 594 del CGP

“De otro lado, al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito, corresponderá a las entidades solicitar la información que les permita identificar la condición de inembargabilidad de los respectivos recursos” (la negrilla no es del texto).

la medida cautelar, en la medida que la juez de primera instancia realizó las previsiones legales acerca de la inembargabilidad de las entidades estatales y, se reitera, es la entidad financiera conforme a los lineamientos legales, quien tiene la obligación de establecer si los recursos ostentan la calidad de inembargables.


En consecuencia, se

RESUELVE:


PRIMERO. CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 0343 del 08 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que decretó medida cautelar de embargo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen, cancélese su radicación y no se condena en costas en esta instancia¹².

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada

SALVA VOTO

¹² VoBo Secretario
Proyectó Andrés M.